

ISSN No. 2631-2743

KAIROS

*Revista de ciencias económicas,
jurídicas y administrativas*

KAIROS, Vol. (5) No. 9, pp. 9-27, julio - diciembre 2022

Andrés David Naranjo Navas

ladnaranjo@uca.edu.ar

Pontificia Universidad Católica Argentina
Facultad de Ciencias Económicas
(Buenos Aires - Argentina)
ORCID: 0000-0002-7818-4845

Christian Paúl Naranjo Navas

cnaranjo@unach.edu.ec

Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Educación, Humanidades y
Tecnología
(Riobamba - Ecuador)
ORCID: 0000-0003-1532-203X

HOMICIDIOS Y SUICIDIOS EN RELACIÓN CON LA INEQUIDAD EN AMÉRICA LATINA

*HOMICIDES AND SUICIDES IN
RELATION TO INEQUALITY IN
LATIN AMERICA*

DOI:

<https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01>

Recibido: 26/05/21

Aceptado: 17/02/22



Unach
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE
CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS

Resumen

La relación entre inequidad y violencia ha sido estudiada dentro de un conjunto de bases de datos y en casos específicos. En la mayoría de los estudios se encuentra una correlación positiva. El caso de América Latina se pierde en las bases de datos globales, por ello, no existe un estudio de solo la región que intente ver la relación entre los homicidios y suicidios y la inequidad. Para responder a este interrogante, se analiza la correlación entre inequidad, pobreza, con homicidios y suicidios de 13 países de América Latina, de 1990 a 2018, a través de una regresión lineal dentro del método de mínimos cuadrados generalizados. A pesar de que la mayoría de los estudios globales, con grandes bases de datos, presentan una correlación positiva, para el caso de la región iberoamericana, se encuentra una correlación baja.

Palabras clave: inequidad, pobreza, homicidios, suicidios, América Latina

Abstract

The relationship between inequity and violence has been studied within a set of databases and in specific cases, in most studies a positive correlation is found. The case of Latin America is lost in global databases, therefore, there is not a study of only the region that tries to see the relationship between homicides and suicides and inequity. To answer this question, the correlation between inequity, poverty, with homicides and suicides in 13 Latin American countries, from 1990 to 2018, is analyzed through a linear regression within the generalized least squares method. Even though most global studies, with large databases, present a positive correlation, in the case of the Ibero-American region, there is a low correlation.

Keywords: inequality, poverty, homicides, suicides, Latin America

HOMICIDIOS Y SUICIDIOS EN RELACIÓN CON LA INEQUIDAD EN AMÉRICA LATINA

*HOMICIDES AND
SUICIDES IN RELATION
TO INEQUALITY IN LATIN
AMERICA*

DOI:

<https://doi.org/10.37135/kai.03.09.01>

Introducción

La percepción de una creciente inequidad en América Latina persiste dentro de los discursos políticos y de la retórica de los movimientos sociales; sin embargo, la inequidad en la región, medida a través del coeficiente de Gini, en promedio de los 13 países estudiados¹, se ha reducido de forma constante en las últimas décadas. El coeficiente ha disminuido de 50 en 1999 a 45 en 2018 (Banco Mundial, 2020). Aunque en Brasil el coeficiente fluctúa de 60,5 en 1990 a 53,9 en 2018, es aún el país con mayor desigualdad en la región², mientras que los países que menor desigualdad presentan son El Salvador (38), Argentina (41), Bolivia (42) y Perú (42).

Los estudios sobre inequidad son extensos. Teichman (2019) sostiene que la mayor parte de los estudios en latinoamericana hacen relación al impacto de los arreglos institucionales del estado, desde el legado colonial hasta las instituciones democráticas del siglo XXI. En historia económica, Abad y Astorga (2017) argumentan que la inequidad en la región no aumenta necesariamente durante los períodos de crecimiento basado en las exportaciones, ni tampoco disminuye como consecuencia de los modelos de industrialización y sustitución de importaciones.

El problema de investigación se refiere a los pocos estudios regionales sobre la relación que existe entre la inequidad y la violencia, en la mayoría de ellos, América Latina aparece representada con pocos países, como en los datos de Fajnzylber, Ledereman, & Loayza (2002), quienes toman en cuenta los datos de 8 países³ de 1965 a 1994. Cuando se incluye los datos de la OECD, África Subsahariana, Asia y Europa oriental, los resultados muestran una correlación positiva entre la inequidad y los robos, e inequidad y homicidios. No obstante, no podemos estar seguros de que el agregado representa los resultados de América Latina.

En el caso de los suicidios, la mayor parte de estudios de caso presentan una correlación positiva entre la inequidad y la violencia, como en el caso de Brasil, en cual se ha encontrado una relación positiva entre el índice de Gini y las tasas de suicidio (Machado, Rasella, & dos Santos, 2015). Así, el objetivo central es responder la pregunta de investigación partiendo de la hipótesis de que los homicidios y suicidios tienen una correlación positiva con la pobreza y la inequidad.

Inequidad y homicidios

De acuerdo a los datos de Roser & Ritchie (2019), la tasa de homicidios, cada 100 mil personas, en América Latina no varía de forma significativa, solo presentan unos picos altos de 1990 a 2018:

¹ Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

² Venezuela es probablemente el país con mayor desigualdad en el continente, los datos oficiales son poco creíbles, por ello, las bases de datos internacionales solo presentan la evolución del coeficiente hasta el 2006.

³ Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Venezuela.

7,1% (1998); 5,4 (2000); 9,5 (2002); 5,2% (2011); y, 7,2% (2014). El resto de años las tasas se mantienen menores al 2%. Con estos datos no se puede afirmar que el número de homicidios se ha reducido en la región, sino que ha pasado por picos de violencia en determinados años. El país con mayor reducción de homicidios es Panamá de 9,1% (1990) a 1,6% (2017); y, Colombia, de 8,4% (1991) a 2,9 % (2017). El país que registra un aumento es Uruguay, de 3,9% (1990) a 6,1% (2017).

La relación entre desigualdad y delincuencia ha sido objeto de teorías sociológicas que proponen que las personas de clase baja tienen tasas de delincuencia más altas que otros grupos. Una de las teorías sobre el crimen, la “privación relativa”, propone que la desigualdad genera tensiones sociales, ya que los menos acomodados se sienten desposeídos en comparación con las personas más ricas (Braithwaite, 1979). Este sentimiento lleva a buscar compensación, a veces, a través de la comisión de delitos tanto contra pobres como contra ricos (Fajnzylber, Lederman, & Loayza, 2002, p. 2).

La literatura muestra que la violencia, medida a partir de las tasas de criminalidad, se entiende por las diferencias entre las ganancias potenciales del crimen y los costos de oportunidad asociados (Becker, 1968). Después, como explicarán Fajnzylber, Lederman & Loayza (2002), existe un vínculo entre la inequidad y la violencia criminal. Las dos están positivamente correlacionadas además de reflejar causalidad de la inequidad hacia las tasas de criminalidad.

Por otro lado, Kelly & Evans (2017) afirman que los modelos agregados producen resultados engañosos en este dominio, sustancialmente debido a problemas insolubles de tamaño de muestra, variables de confusión omitidas y efectos condicionales que difieren entre naciones pobres en desarrollo. Asimismo, Kelly & Evans argumentan que la desigualdad del ingreso nacional es irrelevante para el bienestar subjetivo de las personas en las naciones avanzadas; sin embargo, para las naciones en desarrollo, la evidencia indica un efecto de neutral a positivo para la desigualdad.

Pridemore (2008) ha argumentado que en las últimas tres décadas se han publicado decenas de estudios transnacionales que prueban una asociación entre desigualdad y homicidio, empero ninguno probaba una asociación entre pobreza y homicidio. A pesar de aquello, en su acercamiento al caso de los Estados Unidos, aplicando un proxy de la pobreza (mortalidad infantil), revela una correlación positiva y significativa entre el nivel de pobreza de una nación y su tasa de homicidios.

Años después, Rogers y Pridemore (2020) arguyen que la literatura académica presenta la variable de inequidad económica como una variable estructural que está relacionada con las tasas de violencia. Este fenómeno ocurre porque la percepción de inequidad crea frustración entre los sectores de menor ingreso. La frustración genera ira, la cual lleva a actos criminales. Además, la violencia tiene una correlación muy baja con la pobreza, lo que muestra que el aumento de violencia no ocurre por aumento de la pobreza sino por el aumento de la percepción de inequidad. Aunque la tendencia de la academia presenta la criminalidad como posible consecuencia de la inequidad, Bourguignon

(1998) sostiene que la importancia de la desigualdad como determinante de la delincuencia puede deberse a factores no observados que afectan, simultáneamente, a la desigualdad y la delincuencia. Dentro del contexto revisado, bajo la lupa de las explicaciones criminalísticas de Blau y Blau (1982), Messer y Resonfeld (1997), y Paré (2014), quienes concuerdan que la percepción de inequidad conduce al aumento de homicidios a causa de la frustración individual y colectiva, aunque en principio la hipótesis central de esta investigación fue que la percepción de inequidad tiene una relación directa con el aumento de homicidios y suicidios en América Latina, como veremos más adelante, los resultados muestran lo contrario. Para probar nuestra hipótesis, se va a realizar una regresión lineal utilizando la metodología mínimos cuadrados generalizados, con una temporalización de 1990 a 2018.

Inequidad y suicidio

En su obra clásica, *El Suicidio*, Émile Durkheim (1897) ve el fenómeno como un evento sociológico. Concluyó que las tasas de suicidio se mantienen más o menos estables en largos períodos de tiempo. Sin embargo, los picos que se encontraron estaban relacionados con depresiones económicas o con eventos bélicos. Termina señalando la pertenencia social como un escudo protector frente al suicidio.

El suicidio aparece como un problema personal. Sin embargo, posee un ámbito social, el cual se relaciona con la violencia intrafamiliar y comunitaria. De acuerdo con Maclsaac, Bugeja y Jelinek (2017), las mujeres que son abusadas sexualmente muestran un aumento de 12 a 20 veces en los intentos de suicidio. Por otro lado, el abuso sexual infantil muestra un 150% más de riesgo de comportamiento suicida. Además de conceptualizar el suicidio como un elemento relacionado directamente con la violencia contextual, la Organización Mundial de la Salud la considera como violencia auto dirigida (2002), es decir, el suicidio es considerado como violencia causada y dirigida al mismo individuo.

Las investigaciones de Ritchie, Roser, & Ortiz-Ospine (2019) señalan que las tasas de suicidios, cada 100 mil habitantes, se mantienen en el mismo rango, entre 1,2% y 1,5% de 1990 a 2018. El país con una reducción significativa es Chile, de 3,7 % (1990) a 1,8% (2017), mientras que el país con el menor porcentaje de suicidios es Perú, quienes se mantienen, desde 2008, con números menores a 0,8%. Con estos datos no se observa ninguna tendencia regional, por el contrario, los porcentajes de suicidio se mantiene estables en las tres últimas décadas.

El suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo (World Health Organization, 2020). A pesar de la importancia del tema, no existen estudios para América Latina de la posible correlación entre la inequidad por ingresos y las tasas de suicidio, lo que existe son varios estudios localizados por países que han intentado revisar las tasas de suicidio con factores socioeconómicos como la posición social, la educación, y los bajos ingresos económicos.

Curtis, Curtis y Fleet (2013) afirman que, para el caso de Nueva Zelanda, la inequidad por ingreso ha contribuido al incremento del suicidio. De acuerdo con estos autores, en los años 80s, el pico de suicidios se registró entre los 15-24 años; en los años 90s, el pico de suicidios ocurrió entre los 25-34 años; y, hasta el 2010, el pico de suicidios se visualiza entre 35-44 años. Con cada década, le tendencia de aumento de suicidios pasa una generación.

El suicidio es un fenómeno multicausal. Algunos afirman que las tasas de suicidio aumentan durante los períodos de crisis económica (Robert, 1999), o por la exposición a factores de riesgo ambientales (Subramanian y Paolo Belli, 2002) o por la presencia de factores psicosociales (Heikkinen, Isometsa, MJ, Aro, & Lonnqvist, 1995). En el caso de Brasil, Machado, Rasella, y dos Santos (2015) muestran que el índice de Gini está relacionado positivamente con las tasas de suicidio. También los ingresos bajos y los bajos niveles de educación tuvieron una correlación positiva. Así, la inequidad, bajos ingresos, y bajos niveles de educación representa un riesgo comunitario en relación con el suicidio en Brasil.

Platt (2016) arguye que, en el caso de Escocia, durante el período 1989-2002, a pesar del creciente reconocimiento para abordar las desigualdades en salud, ha habido un fracaso en considerar las cuestiones de igualdad en los enfoques de prevención del suicidio. Platt cree que esto ha ocurrido a pesar de una amplia evidencia en el riesgo de comportamiento suicida asociado con la posición social, el mercado laboral, la educación, los ingresos, la tenencia de la vivienda. La evidencia empírica confirma que la clase social baja y la privación socioeconómica se asocian con un mayor riesgo de suicidio.

Por último, Chandler (2020) analiza un informe multidisciplinario basado en las desigualdades socioeconómicas y las tasas de suicidio en el Reino Unido. El estudio destaca la falta de atención a las desigualdades socioeconómicas y un énfasis en las experiencias y emociones adversas de la vida para comprender el suicidio. Chandler (2020) sostiene que la teorización sobre el suicidio requiere de un abordaje interdisciplinario entre sociólogos, psicólogos y otros. La teorización actual en la investigación del suicidio convencional está limitada por su incapacidad para participar en debates sociológicos duraderos, pero de vital importancia, sobre la estructura y la agencia.

Pobreza y violencia

Con relación a la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, a decir personas que viven con menos de 1,9 USD al día, en la primera mitad de la década de los noventa encontramos una disparidad muy significativa, a decir: países como Brasil, Panamá, El Salvador, presentan una pobreza del 22%, 22%, y 21% respectivamente; mientras que países como Uruguay, Argentina y Paraguay registran una pobreza del 1%. A partir de entonces, toda la región muestra una tendencia descendente, hasta registrar valores que promedian el 2%, el país con el más alto porcentaje es Bolivia, con 5% (CEPAL, 2019).

En la década de los setenta, Townsend (1974), Miller y Roby (1970), propusieron que la esencia de la pobreza es la privación relativa, a decir: la gente es pobre cuando no puede vivir de la forma habitual en sus propias comunidades. Poco después, a pesar de que la pobreza relativa se convertía en una tendencia, Messner (1982) argumenta que la forma tradicional de medir la pobreza es a través de la línea de pobreza, lo cual asegura el costo mínimo para asegurar el bienestar, medido como porcentaje de la población. Además, acusó de absurdo la relación entre la pobreza relativa y el crimen, aquellos que proponían esta correlación eran los teóricos radicales. Messner llega a la conclusión de que, el caso de los Estados Unidos, la relación entre pobreza absoluta y homicidios es cero; por el contrario, la relación con la pobreza relativa presenta una correlación inversa.

Stack (1984) afirma que las observaciones que ayudan a concluir que la mayoría de los delitos que son infligidos por pobres hacia los pobres implica que las características de las víctimas dependen no solo de su riqueza relativa, sino de la distribución de la seguridad. De hecho, el crimen puede ser más frecuente en las comunidades pobres porque la distribución de los servicios policiales por parte del estado favorece a los vecindarios ricos (Fajnzylber, Ledereman, & Loayza, 2002, p. 2). La encuesta longitudinal estadounidense de Jarjoura et al (2002) reveló que cuanto más tiempo vive un joven en la pobreza, es más probable que se involucre en comportamiento delictivo.

La pobreza es más severa, más generalizada y más evitable de lo que oficialmente se reconoce, agravada por fallas institucionales (Pogge, 2013). Es reciente la teoría que afirma que la pobreza es una de las formas de violencia. Ésta teoría afirma que la pobreza y la violencia son una fuerza poderosa que se opone al bienestar colectivo de nuestra sociedad. Allen (2001) cree que los datos revelan la correlación estadísticamente significativa entre pobreza y violencia.

Dong y Egger, Anser et.al (2020), al estudiar la pobreza en triangulación de la desigualdad y el crimen, en un panel de 16 países, de 1990 a 2014, concluyen que no existe una relación uniforme o nula entre el ingreso per cápita y la tasa de delincuencia. La desigualdad de ingresos y la tasa de desempleo aumentan la tasa de delincuencia, mientras que la apertura comercial ayuda a reducir la tasa de criminalidad. Los resultados del análisis de crecimiento favorable a los pobres muestran que, aunque la tasa de delincuencia disminuye en los años 2000–2004 y 2010–2014, la fase de crecimiento se vio en los pobres debido a la distribución desigual de los ingresos.

Tollesfsen (2020) afirma que los países más pobres enfrentan un mayor riesgo de guerra civil; sin embargo, no existe mayores conclusiones sobre si existe una correlación similar a un nivel más local. La investigación sobre el nexo entre la pobreza y el conflicto local se ha basado, en gran medida, en indicadores objetivos de la pobreza que sólo se relacionan vagamente con la justificación del conflicto. Después de analizar datos de encuestas georreferenciadas de la encuesta afro barómetro para 35 estados africanos, Tollesfsen concluye que las áreas con altos niveles de pobreza tienen más probabilidades de experimentar conflictos; es más probable que la pobreza exacerbe la violencia si las instituciones locales de un área son débiles.

A pesar de los resultados presentados en algunos estudios, para el caso de Gran Bretaña, Webster & Kingston (2014) afirma que se han encontrado una relación débil o inexistente entre el nivel socioeconómico y la delincuencia, especialmente entre los ingresos de los padres y el inicio de la delincuencia en los hijos. Para Webster & Kingston, basados en los estudios de Dunaway et al (2000), presentan la poca influencia directa de la pobreza en el crimen; además, enfatizan la mayor probabilidad de ser víctima de un crimen en lugar de delinquir y que este es el aspecto más significativo del impacto de la pobreza en el crimen. De esta forma, a pesar de que la mayoría de los estudios encuentran una relación entre la pobreza y la violencia, existen casos como los de Gran Bretaña o, como en este estudio, casos como los de América Latina en los cuales no se encuentra una correlación significativa entre pobreza y violencia, o entre desigualdad y violencia.

En el caso de México, visto a partir de 2442 municipios en tres etapas distintas (2000, 2005 y 2010), Ramírez (2014) afirma que el índice de violencia está más cercano a la dimensión de la pobreza que a la de desarrollo económico. Sugiere que la pobreza medida por ingresos no suele estar asociada a los crímenes como el homicidio intencional, es la privación relativa la que mejor predice los homicidios, aunque el autor advierte que los resultados deben ser tomados con cautela.

Díaz (2016), sobre el caso de México, analiza los municipios con población mayor a 100 mil habitantes, y llega a conclusiones contrarias a las expuestas por Ramírez, y opuestas a otros casos, a decir, una correlación negativa entre pobreza, desigualdad y homicidios. Díaz propone dos hipótesis alternativas: primero, es solo la pobreza extrema la que impulsa la violencia; segundo, la pobreza influye en la violencia cuando viene acompañada con la desigualdad.

Del lado del homicidio, la mayor parte de la literatura culpa a la desigualdad de ingresos como la causa de los delitos violentos. Dentro de esta literatura se encuentra Parker y Smith (1979), quien presenta la suposición de que el homicidio es un fenómeno unidimensional. A ello, clasifican el homicidio en dos tipos, primario y no primario, según la relación víctima-delincuente. Los autores encontraron que las tasas estatales de homicidio primario están relacionadas con la pobreza y con el porcentaje de la población de 20 a 34 años, mientras que las tasas de homicidio no primario están significativamente relacionadas solo con el porcentaje del estado que vive en áreas urbanas.

Años después, el mismo Robert Parker (1989) discute varias hipótesis derivadas teóricamente y que relacionan tipos de homicidios. Indica la primacía del enfoque socioeconómico para comprender las causas del homicidio y la importancia de una mayor clasificación del homicidio para desenredar los posibles efectos subculturales de los efectos socioeconómicos.

Trabajos como el de Dong y Egger (2020), para el caso de China, al analizar todos los veredictos judiciales para casos de homicidio entre 2014 y 2016, concluyen que es la pobreza y el bajo nivel de ingresos, más que la desigualdad de ingresos, lo que se relaciona positivamente con las tasas de homicidio. Además, sugieren que la migración interna rural-urbana desde localidades más violentas

contribuye a las tasas de homicidio de las ciudades de destino. En lugar de la privación relativa, es la privación absoluta es la principal responsable de los delitos violentos.

Del lado de suicidio, Jutta Lindert (2015) presenta a los países de bajos ingresos de Asia y el Pacífico con mayor carga de suicidios del mundo. Los suicidios están asociados con psicopatologías como la depresión y la desesperanza. La pobreza, la escasez y la crisis económica están asociadas con las psicopatologías. Estas conclusiones se han realizado a pesar de que el mismo autor reconoce que se necesita más conocimiento sobre el impacto de la pobreza, la escasez y las crisis económicas en la desesperanza y el suicidio.

Si bien se ha argumentado que éste puede ser visto como parte de una violencia interna, auto dirigida, El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (2021) de los Estados Unidos dejan en claro que muchos factores pueden aumentar el riesgo de suicidio, por ejemplo, las personas que han experimentado violencia, incluido el abuso infantil, el acoso o la violencia sexual. Además, las personas que han experimentado violencia, incluidas las experiencias adversas de la infancia (como el abuso físico), el acoso o la violencia sexual, tienen un mayor riesgo de suicidio (National Center for Injury Prevention and Control, 2016).

Así también, Rossow (2000) analiza la relación entre el consumo de alcohol y el suicidio, llega a la conclusión de que beber más se asocia con un mayor riesgo de experimentar comportamiento suicida o violencia. Por otro lado, el consumo de alcohol y el abuso infantil son menos extensos, los hallazgos son menos consistentes para demostrar una asociación y muchos estudios han recibido críticas metodológicas (p. 397).

Los casos estudiados muestran que, a pesar de que hay cierto consenso en la influencia de la pobreza y la desigualdad con los homicidios, menos con los suicidios, hay varios casos en los que esta relación es nula o, incluso, inversa. Por ello, los resultados que se presentarán a continuación pueden verse como un aporte a la discusión existente.

Metodología

Después de haber realizado una definición operacional de las variables de análisis (desigualdad por ingreso, pobreza, homicidios y suicidios), en éste y en el siguiente apartado se procede a la justificación de la metodología de investigación utilizada, la cual ha hecho uso del método de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) (en inglés, Generalized Least Squares, WLS/GLS), y a la discusión de los resultados obtenidos.

El método de Mínimos Cuadrados Generalizados es casi similar a la aplicación del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) (en inglés, Ordinary Least Squares – OLS), trata de minimizar la suma de los cuadrados de los errores. En otras

palabras, la suma de los cuadrados con relación a las diferencias entre los valores observados reales con los estimados (Novalés, 2010; Hutcheson, 2011; Universidad de Santiago de Compostela, 2012; Schmidheiny, 2020).

El estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados es un estimador lineal, el cual es insesgado y de varianza mínima en las muestras finitas. Por otra parte, en las muestras grandes, el MCG es consistente y eficiente asintóticamente (Mert, 2015; Asturias Corporación Universitaria, 2015; Casquel y Uriel, 2000). De esta forma, el estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados se expresa de la siguiente manera:

$$\beta_{MCO} = (X^T \Omega^{-1} X)^{-1} X^T \Omega^{-1} Y$$

Este estudio pretende establecer la influencia de la desigualdad por ingreso (Gini) y pobreza⁴ en homicidios y suicidios. Es decir, se tiene dos variables dependientes que son homicidios y suicidios (variables endógenas) y dos variables independientes que son la desigualdad por ingreso y la pobreza (variables exógenas). En este sentido, se busca ver cuál es la relación entre la desigualdad por ingreso y de la pobreza en cada una de las variables dependientes.

Para poder ver esta influencia, se ha realizado una regresión lineal. Se ha decidido utilizar MCG y no el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) porque el MCO no cumple con los supuestos que permite que el estimador sea consistente. De acuerdo con Baronio y Vianco (2014), las estimaciones del MCG son superiores al de MCO en caso de que no se cumpla los supuestos tradicionales y son similares en caso contrario.

Una de las ventajas del método de Mínimos Cuadrados Generalizados es que se puede aplicar este método cuando las varianzas de las observaciones son desiguales. Dicho de otra forma, cuando puede existir heterocedasticidad o cuando existe cierto grado de correlación entre las observaciones (Mert, 2015; Asturias Corporación Universitaria, 2015; Casquel y Uriel, 2000). Cabe mencionar que en este escrito se ha corregido el problema de heterocedasticidad mediante la metodología de Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) (en inglés, Weighted least squares, WLS).

⁴No se ha incluido variables de control por evitar endogeneidad entre las variables y de este modo evitar sesgo en la medición (sobreevaluación o subevaluación).

Los determinantes de la variable "Pobreza" son: desempleo, educación, tamaño del hogar, ocupación del jefe de familia, ubicación (rural o urbana) de la vivienda y tipo de trabajo. Dicho de otra forma, Ignacio y Santos (2018) mencionan que el índice de pobreza está conformado por doce indicadores que están agrupados en cinco dimensiones que son vivienda, servicios básicos, estándar de vida, educación y empleo, y protección social.

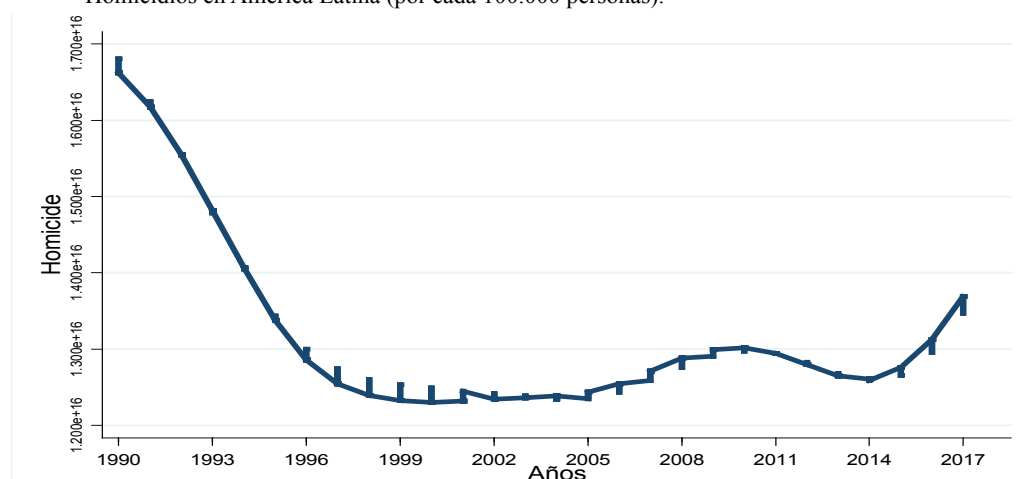
Los determinantes de la variable "Desigualdad por ingreso" son: el gasto sanitario per cápita, la presión fiscal, la redistribución de riqueza, la falta de acceso a servicios básicos (educación, sanidad y justicia), la tasa de alfabetización, cultura (en relación con familias que no quieren que sus hijos se eduquen, sino que vayan directamente al trabajo), corrupción, entre otras.

Resultados y discusión

Los datos de las variables descritas han sido obtenidos del Banco Mundial, de la CEPALSTAT, Our World in Data y de los indicadores de las Naciones Unidas (Human Development Reports). Después de la depuración de datos, se mostrará primeramente las gráficas por cada variable de estudio como promedio de los países latinoamericanos que se están analizando⁵. Posterior a esto, se analizará los resultados obtenidos en cuanto a las regresiones.

En la figura 1 se puede notar el promedio de América Latina en relación con la una variable dependiente, homicidios. Esta figura muestra que, a principios de los años 90, se registra casi 1,7 homicidios por cada 100.000 personas. Como promedio, el índice de homicidios decae aproximadamente hasta el año 1999, después se mantiene constante hasta el 2005 con aproximadamente 1,24 homicidios por cada 100.000 personas. En 2018, se registra 1,37 homicidios por cada 1000.000 personas.

Figura 1. Homicidios en América Latina (por cada 100.000 personas).

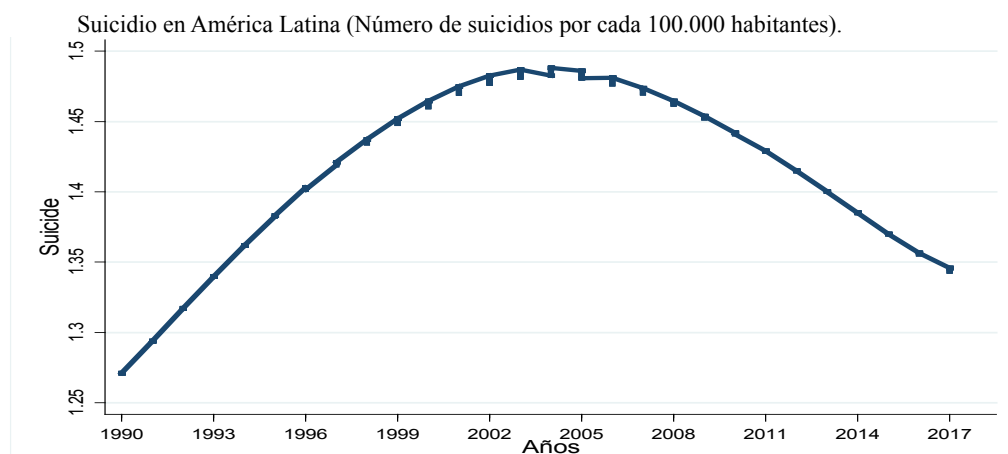


Fuente: elaboración propia.

Con relación a la segunda variable dependiente, suicidios, se puede notar que, por cada 100.000 personas, en 1990 hubo aproximadamente 1,27 suicidios (figura 2). El registro de suicidios asciende hasta el 2004 con aproximadamente 1,48 suicidios. Para el 2018 se tiene 1,34 suicidios. Se puede apreciar que los cambios con relación a suicidios a lo largo del tiempo (desde 1990 al 2018) son bajos.

En 1990, con relación a la primera variable independiente, desigualdad por ingreso (Gini), como lo muestra la figura 3, existió dos tendencias. La primera es una tendencia ascendente de 1990 a 2000; y, la segunda es una tendencia descendente de el 2000 a 2018. Sin embargo, a pesar de estas dos tendencias, queda claro que la desigualdad por ingreso en América Latina ha sido alta a lo largo del tiempo.

⁵ Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay.

Figura 2.

Fuente: elaboración propia.

Desde esta perspectiva, surge la incógnita del ¿por qué existen registros altos desde 1990? Debido a que durante los noventa existieron varios problemas de estabilidad económica, por el ejemplo: en el caso de Ecuador, la crisis bancaria de los 99; en el caso de Argentina, la crisis de la convertibilidad y la hiperinflación; en caso de México, la crisis de tequila, etc.

En Ecuador, la crisis tuvo varias consecuencias como creación de la Ley de Instituciones Financieras en la que se redujo los tipos de interés para incrementar la liquidez del mercado crediticio, generando así una burbuja de inversión. Además, los préstamos vinculados que debilitó el sistema bancario al disminuir las reservas monetarias de los depositantes. Y, el cruel fenómeno del niño. Todo esto provocó que los deudores de la banca perdieran el valor de las inversiones, cayendo en impagos, con el consecuente pánico bancario. Para rescatar al país de la crítica situación financiera, se dolarizó la economía ecuatoriana (De la Torre y Mascaró, 2011; Larrea, 2004; Herrera, 2012; Mesías, 2002).

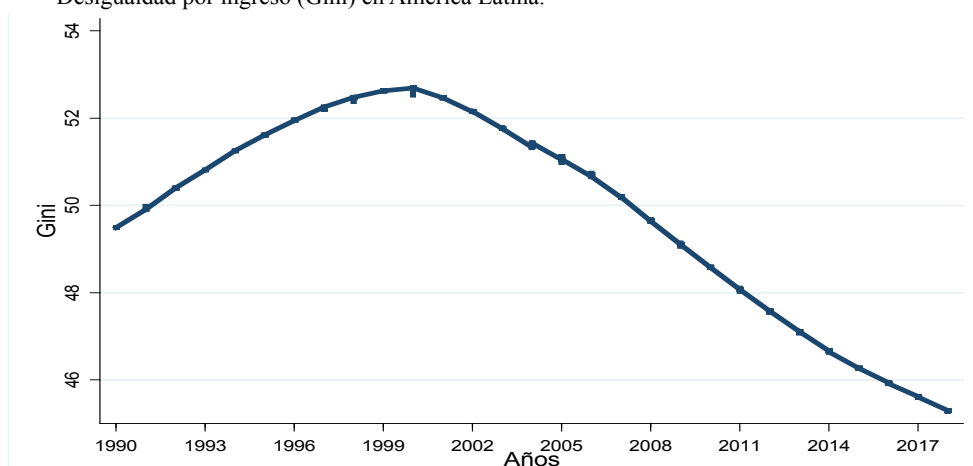
Argentina vivió una crítica crisis en los años 90 a causa de la hiperinflación. Colapsó las finanzas públicas; por un lado, con un alto endeudamiento público, por otro lado, con reservas internacionales a niveles mínimos, dejando una situación fiscal deteriorada. Se trató de estabilizar la economía mediante la ley de convertibilidad (Castro, 2001), la cual consistía en fijar el valor de la moneda legal con una masa estable (en este caso, el dólar). En otras palabras, se estableció una relación cambiaria fija entre el peso argentino y el dólar, de 1 a 1. Para esto era necesario que se respalde cada peso en circulación con un monto equivalente de oro o divisas, A causa de la salida divisas del país, el gobierno promulgara la medida conocida como “corralito”, la cual restringía el retiro efectivo de los bancos. Todo este plan no fue sostenible y se desarma en el 2002, año en el que termina la ley de convertibilidad (Rojas, 2003; Macías, 2002).

En el caso de México, la crisis financiera de 1994, conocida como el Efecto Tequila o también conocida como el error de diciembre. Esta crisis fue causada por la falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda y el fortalecimiento de la moneda extranjera. La moneda se devaluó aseleradamente, llegando a incrementar el valor del dólar en casi 300%. Esto produjo altas tasas

de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y crisis en la actividad comercial. Para hacer frente a la emergencia, recurrieron a un paquete de rescate que consistió en la inyección al Fondo Monetario Internacional para tratar de esta forma estabilizar el precio del dólar.

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano tuvo un alto gasto gubernamental en obras públicas, lo cuál se convirtió en un déficit histórico. Para poder mantener este déficit se emitió los TESOBONOS, los cuales aseguraban el pago de la deuda en dólares en vez de pesos mexicanos. Con esto, México experimentó prácticas bancarias no reguladas que permitieron la obtención de créditos en exceso que luego fueron de difícil recuperación. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, lo que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas (Musacchio, 2012; Banda & Chacón, 2005; Millán, 1999; Arnaudo et. al, 2003).

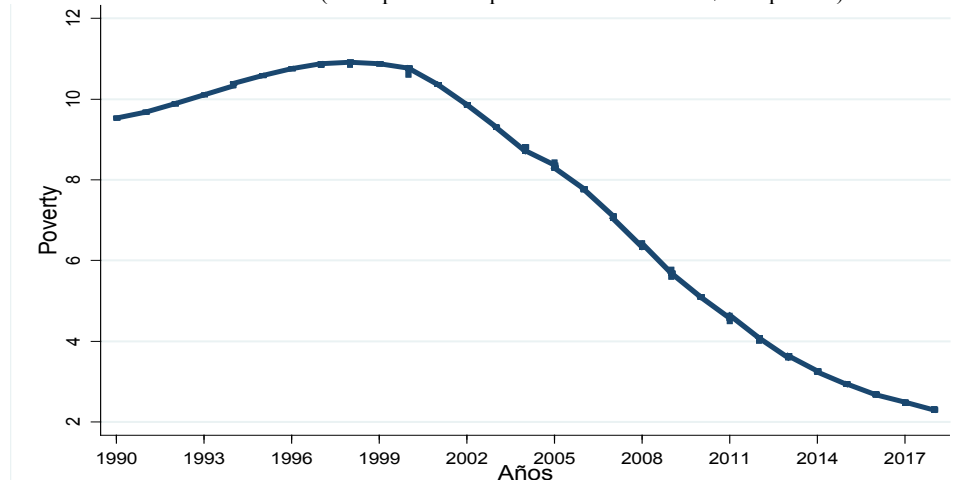
Figura 3. Desigualdad por ingreso (Gini) en América Latina.



Fuente: elaboración propia.

En la figura 4 se puede observar que la población que vive por debajo del umbral internacional, es decir, por debajo del \$1,90 por día, fue aproximadamente entre el 9% al 11% hasta el año 2000. Desde el 2000, el índice de la pobreza comienza a decaer, registrando así, como promedio, un 2,20% en el 2018.

Figura 4. Pobreza en América Latina (% de población que vive con menos de \$1.90 por día).



Fuente: elaboración propia.

Analizando las gráficas, da la impresión de que las variables desigualdad por ingreso y pobreza no influyen en homicidios. Sin embargo, parece existir una relación causal entre las variables desigualdad por ingreso y pobreza con suicidios. Es decir, mientras son más inequitativos los ingresos y aumenta la pobreza, aumentarán los suicidios. No pasa lo mismo con los homicidios, cuya correlación y causalidad son insignificantes. Estas relaciones se lo confirmarán mediante los resultados de las regresiones que se muestran a continuación.

Mediante el método de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) (en inglés, Generalized Least Squares, WLS/GLS) se obtuvieron dos resultados. Primero, las variables independientes (desigualdad por ingresos y la pobreza) no son significativas en relación con la variable dependiente homicidios. Es decir, las variables independientes no explican la variable dependiente homicidios. Segundo, las variables independientes si explican la variable dependiente suicidios (tabla 1 y 2).

En la tabla 1, de un total de 179 observaciones, por cada punto que baje en la desigualdad por ingreso (Gini), la variable dependiente (suicidios) reducirá en un 13,60%. Analizando la tabla 2, de un total de 241 observaciones, por cada punto que baje en el índice de pobreza, la variable dependiente (suicidios) reducirá en 3,71%.

Tabla 1. Influencia de Desigualdad por ingreso (Gini) en Suicidios en América Latina, 1990-2018.

Variance-weighted least-squares regression			Number of obs = 179		
Goodness-of-fit chi2(67) = 3328.85			Model chi2(1) = 20864.58		
Prob > chi2 = 0.0000			Prob > chi2 = 0.0000		
Suicide	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf. Interval
Gini	-.1360747	.000942	-144.45	0.000	-.1379211 - .134228
_cons	1.174386	.0065175	180.19	0.000	1.161612 1.187161

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Influencia de la Pobreza en Suicidios en América Latina, 1990-2018.

Variance-weighted least-squares regression			Number of obs = 241		
Goodness-of-fit chi2(67) = 112.42			Model chi2(1) = 447.11		
Prob > chi2 = 0.0000			Prob > chi2 = 0.0000		
Suicide	Coef.	Std. Err.	z	P> z	95% Conf. Interval
Poverty	-.0371415	.0017565	-21.14	0.000	-.0405843 - .033698
_cons	.2775805	.0072988	38.03	0.000	.2632751 .2918859

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Dentro del contexto de los estudios de Kelly & Evans (2017), se puede notar que los datos agregados, en los cuales América Latina aparece representada por pocos países, difuminan las particularidades regionales, y pueden llegar a producir conclusiones engañosas, a decir: no se puede argumentar que la tendencia mundial, de una posible correlación entre inequidad y violencia, así como entre pobreza y violencia, representa a todas las regiones y sus particularidades. Este es el caso de América Latina, cuyos resultados son disímiles en relación con los resultados de los estudios agregados.

El resultado de las regresiones muestra una relación nula entre las variables independientes, desigualdad por ingresos y la pobreza, en la variable dependiente, homicidios. Sin embargo, las independientes sí tienen una relación causal con la variable dependiente, suicidios. En este sentido, por un lado, la influencia de la variable desigualdad por ingreso en suicidios es de 13,60%. Por otra parte, existe una menor influencia de la variable pobreza en suicidios, su influencia es del 3,71%.

De acuerdo con Fajnzylber, Ledereman, & Loayza (2002), quienes analizaron América Latina, la OECD, África Subsahariana, Asia y Europa oriental, muestran una relación causal entre la inequidad y la violencia, de igual forma con la inequidad y los robos, e inequidad y homicidios. Con esto se puede concluir que cuando se toma los valores agregados, las regiones se pierden y se promueve conclusiones erróneas. Este es el caso de América Latina, en el cual se ha encontrado que no existe relación alguna entre las variables independientes desigualdad por ingresos y la pobreza en la variable dependiente homicidios.

Referencias

1. Allen, J. A. V. (2001). Poverty as a Form of Violence. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 4(2-3), 45-59. https://doi.org/10.1300/J137v04n02_03
2. Arnaudo, J., Querol, L. y Pérez, G. (2003). *Crisis del Tequila: sus efectos sobre el sistema financiero argentino y sus normas prudenciales*. Trabajo final de Maestría en Dirección de Empresas. Universidad del Cema. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2240>
3. Arroyo Abad, L., & Astorga Junquera, P. (2017). Latin American earnings inequality in the long run. *Cliometrica*, 11(3), 349-374. <https://doi.org/10.1007/s11698-016-0150-9>
4. Asturias Corporación Universitaria. (2015). *Multicolinealidad, Heterocedasticidad, Autocorrelación*. Nota técnica. Asturias Corporación Universitaria. https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/econometria/unidad3_pdf1.pdf
5. Banco Mundial. (2020). *Índice de Gini*. Recuperado el 22 de septiembre de 2020, de <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=BR-AR-CL-EC-PE-CO-BO>
6. Baronio, A., & Vianco, A. (2014). Datos de Panel. 1-24. <http://www.econometricos.com.ar/wp-content/uploads/2012/11/datos-de-panel.pdf>
7. Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217. <http://www.jstor.org/stable/1830482>
8. Blau, J. R., & Blau, P. M. (1982). The Cost of Inequality: Metropolitan Structure and Violent Crime. *American Sociological Review*, 47(1), 114-129. <https://doi.org/10.2307/2095046>
9. Bourguignon, F. (1998). *Crime as a Social Cost of Poverty and Inequality: A Review Focusing on Developing Countries* (unpublished manuscripts). *World Bank, Development Economics Research Groups*.

10. Braithwaite, J. (1979). *Inequality, crime and public policy*. Londres: Routledge and Kegan Paul.
11. Casquel, E., & Uriel, E. (2000). *Un estudio comparativo del estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados para modelos de Panel*. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. <https://www.uv.es/uriel/publicaciones/126%202000-12%20ivie.pdf>
12. Castro, J. (2001). Política y economía en la Argentina de los 90. *LLILAS*. <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/castro.pdf>
13. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). *Facts about Suicide*. Obtenido de <https://www.cdc.gov/suicide/facts/index.html>
14. CEPAL.(2019). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Recuperado el 06 de octubre de 2020, de Umbral de Pobreza: <https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3682&idioma=e>
15. Chacón, S., & Banda, H. (2005). La crisis financiera mexicana de 1994: una visión política-económica. *Foro Internacional*, *XLV*(3), 445-465. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59921013004>
16. Chandler, A. (2020). Socioeconomic inequalities of suicide: Sociological and psychological intersections. *European Journal of Social Theory*, *23*(1), 33–51. <https://doi.org/10.1177/1368431018804154>
17. Chirivella, V. (2015). Hipótesis en el modelo de regresión lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios. *Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad*. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53302/Hip%F3tesis%20en%20el%20modelo%20de%20regresi%F3n%20lineal%20por%20M%EDnimos%20Cuadrados%20Ordinarios.pdf?sequence=1>
18. Curtis, B., Curtis, C., & Fleet, R. (2013). Socio-economic factors and suicide: The importance of inequality. *New Zealand Sociology*, *28*(2), 77-92.
19. De la Torre, A., & Mascaró, Y. (2011). *La gran crisis ecuatoriana de finales de los noventa: debacle de banca, moneda y deuda*. https://www.planv.com.ec/sites/default/files/de_la_torre_-_la_gran_crisis_dic_2011_0.pdf
20. Dong, B., Egger, P. H., & Guo, Y. (2020). Is poverty the mother of crime? Evidence from homicide rates in China. *PloS one*, *15*(5), e0233034. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233034>
21. Dunaway, R. G., Cullen, F. T., Burton, V., & Evans, D. T. (2000). The myth of social class and crime revised: An examination of class and adult criminality. *Criminology*, *38*, 589-632.
22. Durkheim, É. (1897). Le suicide. *Étude de sociologie*.
23. Fajnzylber, O., Ledereman, D., & Loayza, N. (2002). Inequality and violent crime. *The Journal of Law and Economic*, *45*(1), 1-40.
24. Gujarati, D., & Porter, D. (2009). *Basic Econometrics. Fifth Edition* (Fifth Edition ed.). McGraw-Hill.
25. Heikkinen, M., Isometsa, E., MJ, M., Aro, H., & Lonnqvist, J. (1995). Social factors in suicide. *The British Journal of Psychiatry*, *167*, 747-753.

26. Herrera, N. (Noviembre de 2012). La crisis financiera de 1998-99 y el relevo de los grupos financieros en el Ecuador. *FLACSO Ecuador*. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/5276/2/TFLACSO-2012NEHR.pdf>
27. Hutcheson, G. (2011). Ordinary Least-Squares Regression. En L. Moutinho, & G. Hutcheson, *The SAGE Dictionary of Quantitative Management Research* (págs. 224-228). [https://datajobs.com/data-science-repo/OLS-Regression-\[GD-Hutcheson\].pdf](https://datajobs.com/data-science-repo/OLS-Regression-[GD-Hutcheson].pdf)
28. Ignacio, F., & Santos, M. (2018). Las múltiples dimensiones de la pobreza: posadas en el contexto de la Argentina urbana. *Visión de Futuro*, 22, 117-136. <https://www.redalyc.org/journal/3579/357959312007/html/>
29. Jarjoura, G.R., Triplett, R.A. & Brinker, G.P. (2002). Growing Up Poor: Examining the Link Between Persistent Childhood Poverty and Delinquency. *Journal of Quantitative Criminology*, 18, 159–187. <https://doi.org/10.1023/A:1015206715838>
30. Kelly, J., & Evans, M. D. (2017). The new income inequality and well-being paradigm: Income inequality has no effect on happiness in rich nations and normal times, varies effect in extraordinary circumstances, increases happiness in poor nations, and interacts with individuals' perceptions, attitudes, politics, and expectations for the future. *Social Science Research*, 62, 39-74. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.12.007>
31. Larrea, C. (2004). *Dolarización, crisis y pobreza en el Ecuador*. https://www.fes-ecuador.org/fileadmin/user_upload/pdf/078%20DOLPOB2004_0418.pdf
32. Lindert, J. (2015). *Regular workshop: Poverty, hopelessness and suicide*. 8th European Public Health Conference. Utrecht: European Public Health Association.
33. Macías, H. (2002). La crisis argentina: origen, evolución y lecciones. *Semestre Económico*, 5(10). <https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1379>
34. Machado, D.B., Rasella, D., dos Santos, D.N. (2015) Impact of Income Inequality and Other Social Determinants on Suicide Rate in Brazil. *PLOS ONE*, 10(4): e0124934. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0124934>
35. Maclsaac, M., Bugeja, L., & Jelinek, G. (2017). The association between exposure to interpersonal violence and suicide among women: a systematic review. *Aust N Z J Public Health*, 41(1), 61-69.
36. Mert, Y. (2015). Generalized least squares and weighted least squares estimation methods for distributional parameters. *REVSTAT, Statistical Journal*, 13(3), 263–282.
37. Mesías, A. (2002). La crisis bancaria de 1999. Un análisis a partir de la teoría de información asimétrica. *Cuestiones Económicas*, 18. https://www.bce.fin.ec/cuestiones_economicas/images/PDFS/2002/No2/Vol.18-2-2002ANDREAMESIAS.pdf
38. Messner, S. (1982). Poverty, Inequality, and the Urban Homicide Rate: Some Unexpected Findings. *Criminology*, 20(1), 103-114.
39. Messner, S. F., & Rosenfeld, R. (1997). Political restraint of the market and levels of criminal homicide: A cross-national application of institutional-anomie theory. *Social Forces*, 75, 1393-1416.
40. Meghan L. Rogers & William Alex Pridemore (2022) Perceived Inequality and Cross-National Homicide Rates.

Justice Quarterly, 39(2), 225-251, <https://doi.org/10.1080/07418825.2020.1729392>

41. Millán, H. (1999). Las causas de la crisis financiera en México. *Economía, Sociedad y Territorio*, 2(5) 25-66. <https://www.redalyc.org/pdf/111/11100502.pdf>
42. Miller, S., & Roby, P. (1970). *The Future of Inequality*. New York, EE.UU.: Basic Books.
43. Musacchio, A. (2012). Mexico's financial crisis of 1994-1995. *Harvard Business School Working Paper*. <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/9056792/12-101.pdf>
44. National Center for Injury Prevention and Control. (2016). *Preventing Multiple Forms of Violence: A Strategic Vision for Connecting the Dots*. <https://www.cdc.gov/violenceprevention/about/connectingthedots.html>
45. Novales, A. (2010). *Análisis de Regresión*. Universidad Complutense, Departamento de Economía Cuantitativa. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-11-13-Analisis%20de%20Regresion.pdf>
46. Paré, P. P. (2014). Indicator of police performance and their relationships to cross-national homicide rate across 77 national. *International Criminal Criminal Justice Review*, 24, 254-270.
47. Parker, R. N. (1989). Poverty, Subculture of Violence, and Type of Homicide. *Social Forces*, 67(4), 983-1007.
48. Parker, R. N., & Smith, M. D. (1979). Deterrence, Poverty, and Type of Homicide. *American Journal of Sociology*, 85(3), 614-624.
49. Platt, S. (2016). Inequalities and Suicidal Behavior. En R. O'Connor, & J. Pirkis, *The International Handbook of Suicide Prevention*. John Wiley & Sons, Ltd.
50. Pogge, T. (2013). Poverty and Violence. *Law, Ethics, and Philosophy*, 1, 87-111.
51. Ritchie, H., Roser, M., & Ortiz-Ospina, E. (2019). *Our World in Data*. Recuperado el 06 de octubre de 2020, de Suicide: <https://ourworldindata.org/suicide>
52. Robert, S. (1999). Socioeconomic position and health: the independent contribution of community socioeconomic context. *Annu Rev Sociol*, 25, 489-516.
53. Rojas, M. (2003). *Historia de la crisis argentina*. https://www.cadal.org/libros/pdf/Historia_de_la_Crisis_Argentina.pdf
54. Roser, M., & Ritchie, H. (2019). *Our World in Data*. Recuperado el 06 de octubre de 2020, de Homicides: <https://ourworldindata.org/homicides>
55. Rossow, I. (2000). Suicide, Violence and Child Abuse: A Review of the Impact of Alcohol Consumption on Social Problems. *Contemporary Drug Problems*, 27(3), 397-433.
56. Schmidheiny, K. (2020). The Multiple Linear Regression Model. 1-16. Obtenido de <https://www.schmidheiny.name/teaching/ols.pdf>

57. Stack, S. (1984). Income inequality and Property Crime: A Cross-National Analysis of Relative Deprivation Theory. *Criminology*, 22(2), 229-256.
58. Subramanian, S. V., & Paolo Belli, K. (2002). The macroeconomic determinants of health. *Annu Rev Public Health*, 23, 287-302.
59. Teichman, J. (2019). Inequality in Twentieth-Century Latin America: Path Dependence, Countermovements, and Reactive Sequences. *Social Science History*, 43(1), 131-157.
60. Tollesfsen, A. F. (2020). Experienced poverty and local conflict violence. *Conflict Management and Peace Science*, 37(3), 323-349.
61. Townsend, P. (1974). Poverty as relative deprivation: resources and style of living. En D. Wedderburn, *Poverty, Inequality and Class Structure*. Cambridge: Cambridge University.
62. Universidad de Santiago de Compostela. (2012). Regresión lineal simple. *Departamento de estadística e investigación operativa*, 1-31. http://eio.usc.es/eipc1/BASE/BASEMASTER/FORMULARIOS-PHP-DPTO/MATERIALES/Mat_50140116_Regr_%20simple_2011_12.pdf
63. Webster, C., & Kingston, S. (2014). Anti-Poverty Strategies for the UK. *Centre fo Applied Social Reserach*.
64. World Health Organization. (2002). *Self-directed violence*. Recuperado el 2021, de http://www.who.int/violence_injury_prevention
65. World Health Organization. (2020). *Suicide data*. Recuperado el 30 de septiembre de 2020, de https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/